

## ***Panamá: una nación en su laberinto***

**Leis, Raúl**

---

**Raúl Leis:** Sociólogo panameño. Dirige el Centro de Estudios y Acción Social de Panamá (CEASPA). Es profesor en la universidad y miembro directivo de CRIES y CEAAL.

---

Comprender lo que pasa en Panamá no es fácil. Se trata de un proceso complejo donde confluyen variados factores económicos, políticos, sociales, internos y externos a la sociedad panameña. Así, la crisis adquiere modalidades muy propias que escapan a las interpretaciones unilaterales, y muchas veces reduccionistas, que han abundado en estos meses.

La crisis se ha vuelto ingobernable para los diversos actores envueltos en ella, prolongándose y profundizándose, en lugar de resolverse o darse al menos treguas de respiro y reacomodamientos fundamentales.

Las elecciones del 7 de mayo de 1989 se constituyeron en un intento de controlar y dirimir la situación.

Para las fuerzas gubernamentales (COLINA, Fuerzas de Defensa), las votaciones tenían la finalidad de legitimar a lo interno y a lo externo la conducción del Estado, desarmando además la escalada opositora y la presión económica, política, militar y diplomática de los EE.UU. Su oferta electoral era el nacionalismo con conducción militar, como única posibilidad de soberanía permanente hacia el cumplimiento de los Tratados del Canal. Pero tenía detrás de sí un controvertido proceso de 21 años, donde los avances reformistas se enfrentaron con serios retrocesos y desgaste, en especial en la década de los 80. Además, el peso de la crisis de los dos últimos años era un formidable reto para ganar el consenso interno, más aún cuando no se avizoran soluciones reales y viables para los viejos y nuevos problemas por los que atraviesa la población. El eje central de la oferta electoral giraba en torno a la contradicción imperio-nación.

Para las fuerzas opositoras de la ADOC (Alianza Democrática de Organizaciones Civildistas), con apoyo explícito de los EE.UU., su planteamiento básico era el ofrecimiento de cambio político, con énfasis fundamental en la contradicción entre la conducción autoritaria del Estado y la necesidad de la democracia formal. La oferta electoral opositora incluía la viabilidad de resolver el aspecto económico inmediato

de la crisis con el apoyo de los EE.UU., deteniendo el derrumbe financiero general. Para ello, asignaba a las Fuerzas de Defensa un papel de subordinación en el plano político, intentando aprovechar el desgaste político acumulado por las fuerzas gubernamentales. Para lograr este fin convoca a las bases arnulfista (huérfanas de su líder, fallecido en agosto de 1988), con el civilismo surgido como reacción antimilitar a raíz de las explosivas declaraciones del ex-coronel Díaz Herrera en 1987, intentando fortalecer partidos de mediano y poco caudal electoral, como el PDC y el MOLIRENA (Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, de derecha).

Entre estos bloques aparece el Partido Panameñista Auténtico, que va a jugar un papel diversionista entre los opositores. Analistas en Panamá aseguraban que se trató de una táctica oficialista para restar votos a la ADOC.

### ***Coincidencias y divergencias***

Ambos bloques políticos divergían fundamentalmente en la política exterior y, en especial, en el papel asignado a las Fuerzas de Defensa. Para COLINA ese papel era de «cooperación» en el desarrollo nacional. Para la ADOC se trataba de una «estricta subordinación» al gobierno civil, con funciones de seguridad y protección de los bienes de los ciudadanos.

En el aspecto económico, los bloques más bien convergían. Según Carta Económica <sup>1</sup> ambos le daban un papel preponderante a la empresa privada. Hacían énfasis en el papel de la agricultura y la industria en la recuperación económica, pero sin claridad programática en cuanto a las políticas específicas respecto a la industria. Daban un papel importante a levantar el sector construcción y a dinamizar el aprovechamiento de las áreas revertidas a Panamá por los tratados canaleros. Preservaban más que modificaban la banca y el sistema monetario panameño (dólar como papel moneda). Exponían la renegociación y ajuste de la deuda y finanzas públicas y concentraban en la política social la lucha contra el desempleo.

Ambos bloques lanzaron como cabezas de sus nóminas a figuras sin una trayectoria pública visible, sino más bien leales y fieles a los líderes fenecidos y sus actuales representantes. Así, Endara era el heredero de Arnulfo Arias; y Duque, heredero de Torrijos y hombre de confianza de las FFDD. Los dos, empresarios. El primero, miembro y abogado de grandes compañías y, el segundo, administrador de empresas acusadas de ser frentes económicos de las FFDD.

---

<sup>1</sup>Carta económica, año 24, Panamá, marzo, 1989.

Los métodos electorales de ambos bloques no fueron fundamentalmente diferentes: propaganda vacía de programas concretos; plutocratización, que permitía sólo a los que contaban con recursos económicos propagandizarse; el clientelismo; «la compra de votos por parte de los partidos políticos», como lo señaló después el Tribunal Electoral<sup>2</sup>.

El énfasis en el nacionalismo, en uno, y la democracia, en otros, no ofrecía un paquete integrado de alternativas a la población, que estaba sumergida en una crisis global y prolongada.

### ***Intervención, penuria, desasosiego***

El momento preelectoral no se situaba en un escenario normal, sino en una crisis global de muchas aristas, pero una de ellas - la intervención norteamericana - matisaba profundamente el juego de las contradicciones internas.

Para la administración Reagan-Bush las elecciones se convirtieron en la oportunidad de incidir en la coyuntura panameña y ganar «la batalla de Panamá». Por ello continúan reconociendo a un presidente ausente (Eric Delvalle), apuestan con todo a la oposición (incluso con 10 millones de dólares para la campaña), mantienen duras sanciones económicas contra Panamá, intentan aislar políticamente al país, y hasta presionan militarmente a través del Comando Sur.

El 7 de abril de 1989, Bush prorroga las sanciones impuestas por su antecesor, las que habían dejado ya el saldo siguiente:

La economía cae en un 19 por ciento. El PIB por habitante, en un 19,3 por ciento. Los ingresos fiscales, en un 44 por ciento y, por consiguiente, bajan los servicios a la población y los programas de inversión. La fuga de capitales se estima en 24 mil millones de dólares. El país reduce sus exportaciones en un 11,3 por ciento y sus importaciones en 35 por ciento. El sector de la construcción se contrae en 60 por ciento con despido del 85 por ciento de los trabajadores. El comercio tiene un 28,3 por ciento de disminución.

El desempleo asciende del 11,8 al 16 por ciento. El nivel de pobreza asciende del 33 al 40,2 por ciento. Los servicios básicos disminuyen dramáticamente.

---

<sup>2</sup>Decreto N° 58 sobre la nulidad de las elecciones, Tribunal Electoral, 10 de mayo, 1989.

Las sanciones consisten básicamente en el congelamiento de 100 millones de dólares de la reserva del Banco Nacional en bancos situados en Norteamérica. Unas 200 empresas norteamericanas dejan de pagar impuestos (400 millones de dólares en un año), incluyendo la Comisión del Canal. Se excluye a Panamá de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Eliminación de la cuota azucarera (20 mil toneladas). Suspensión de toda ayuda económica y militar.

### ***Un poder hostil con historia***

La presencia permanente de tropas norteamericanas en Panamá está ligada al inicio de las obras del canal en 1904. Lo que aparentemente eran instalaciones castrenses dedicadas a la defensa in situ de la vía interoceánica, se convierte en un poder hostil, deformante de la Constitución soberana del Estado. Las diversas formas de intervencionismo son consagradas al inicio de la República, en los propios tratados impuestos a Panamá, apenas 15 días después de su constitución como nación independiente. En los años siguientes, los EE.UU. intervienen en varias ocasiones a pedido de fuerzas políticas panameñas, que buscan inclinar la balanza a su favor echando mano al auxilio del poderoso vecino. Esto es aprovechado por EE.UU. no sólo para favorecer intereses locales, sino para asegurar sus propios intereses. Así, en 1906, el Concejo Municipal de Panamá pide al ejército norteamericano que supervise las elecciones. Peticiones similares se suceden en 1908 y 1912. En 1916, grupos oligárquicos lo solicitan nuevamente y EE.UU. aprovecha para desarmar a la entonces Policía Nacional, y erigirse como única entidad militar real en el istmo. En 1918, el presidente Ciro Urriola suspende las elecciones, Ricardo Arias (antecesor de Ricardo Arias Calderón) y Pablo Arosemena, envían memo al Encargado de Negocios de EE.UU. solicitando la intervención. En aquella ocasión las tropas norteamericanas ocupan por dos años la provincia de Chiriquí (límitrofe con Costa Rica) e imponen a Panamá el fallo White. También ocupan militarmente Panamá y Colón, y amenazan con tomarse la isla de Taboga frente a la entrada del Canal del lado del Pacífico. En 1925, el presidente Chiari pide la intervención para contener al ascendente Movimiento Inquilinario, que exigía la rebaja de los alquileres de casas populares, lucha que dejó un considerable saldo de muertos y heridos.

En 1963, las instalaciones y fuerzas militares en Panamá toman el nombre de Comando Sur, con Jurisdicción para Centro y Sudamérica<sup>3</sup>. Es un enclave vigía estratégico con más funciones de contrainsurgencia y control internacional que de defensa en sí del Canal. En la actualidad, ha unificado sus componentes aéreos, marí-

---

<sup>3</sup> R. Leis: Comando Sur: poder hostil, CEASPA, 2a edición, 1988.

timos y terrestres en la Fuerza de Tarea Conjunta-Panamá <sup>4</sup> bajo el mando del general Fred Woerner, un militar que ostenta una maestría en estudios latinoamericanos y ha servido en Colombia, Uruguay, Guatemala y Honduras.

### ***Rostros de la intervención***

Desde el Comando Sur se desarrollan, pues, las acciones intervencionistas contra Panamá. Se protege y proporciona infraestructuras a las acciones de Eric Delvalle, al que EE.UU. reconoce como legítimo presidente de Panamá. Se apoya el montaje de una red clandestina de radio y televisión y de redes de espionaje. Se abre un centro de información sobre las elecciones de 1989, paralelo al Centro del Tribunal Electoral, utilizándose la televisión (Canal 8) y la radio (SCN), canales oficiales del Comando Sur captados perfectamente en Panamá. Se propician entradas y salidas ilegales a través del aeropuerto de la base Howard, como el caso de los observadores oficiales norteamericanos a las elecciones. Se aumentan efectivos militares y se prepara una eventual intervención militar directa.

Fuera de los muy divulgados propósitos democráticos de los EEUU acerca de la situación interna de Panamá, está claro que ninguna acción de esta magnitud soslaya intenciones más de fondo: la mantención, protección y continuidad de sus intereses estratégicos en Panamá.

A esta situación de penuria económica e intervención externa, es necesario añadir el desasosiego. Ante la pérdida del consenso interno que disfrutaron las fuerzas gubernamentales en la década del 70, en torno a la unidad nacional frente a las negociaciones canaleras, y a la existencia de condiciones económicas y políticas que permitían reformas para los pobres y ganancias para los ricos, se recurre más al control interno y formas parciales de coerción para controlar a la oposición. Aunque comparativamente con otras sociedades son formas leves, sí son pronunciadas para los niveles acostumbrados en Panamá. Por otro lado, tampoco hay definición en favor de los sectores populares, al no impulsarse proyectos clamados por trabajadores, campesinos, indígenas, que fácilmente hubieran engrosado una base social real para las fuerzas gubernamentales.

El saldo preelectoral es, pues, un país empobrecido, acosado, dividido e inseguro. Saldo que imprime sus características en el voto del 7 de mayo de 1989.

---

<sup>4</sup>Mayor Gral. Bernard Lofke: Military Review, edición latinoamericana, agosto, 1988.

### ***Unas elecciones anuladas***

Ese 7 de mayo, el 80 por ciento de los votantes acudió a las urnas a interpretar con el sufragio su visión de la crisis. La población en general, con bajos niveles de organización y conciencia política, respondió directamente a sus aspiraciones de corto plazo, a sus necesidades inmediatas. Independientemente de las cifras electorales que sustentan las fuerzas opositoras, gubernamentales o la Iglesia, es palpable que una mayoría votó contra el gobierno. ¿Por qué?

Fue un voto reactivo, un voto contra. Los que votaron contra el gobierno, lo hicieron por variadas razones. Para unos fue votar contra una situación económica grave, ante la cual sentían que el gobierno no ofrecía paliativos reales. El bloqueo económico de EE.UU. surtió efecto: «Asfixiemos a Panamá, para que la gente rechace a Noriega y al gobierno», parecía ser el mensaje subliminal. Para otros votantes era, «Si la oposición recibió 10 millones, significa que vendrán más si ellos ganan. Ellos pueden traer los dólares que nos faltan». Otros votaron contra la ausencia de las medidas populares que esperaban: la comarca indígena que no aprobó la Asamblea; las leyes que reformaron el Código laboral que diseñó el FMI e impuso el gobierno y las FFDD y que aún están vigentes; la reforma agraria que nunca se hizo de verdad.

Otros se fueron contra la corrupción y el desgaste gubernamental de 21 años de proceso, pues evaluaron que existían más retrocesos y dificultades que logros, sin importar quiénes gobierno o sanciones norteamericanas - fuesen las causantes.

Otros votaron contra la violencia anterior o actual, la coerción que, a pesar de no tocar a todos, tiene en esta sociedad un efecto de cascada, que se transmite y se aumenta oralmente. Otros, empleados públicos o transportistas, por sentirse acarreados, presionados a respaldar sin un convencimiento real las candidaturas oficiales.

Los que favorecieron al gobierno, se dividían entre votos contra la intervención de EE.UU. y aquellos que se inclinaron sin ambages por el programa de COLINA.

Los actos de violencia durante el conteo de los votos, el robo y destrucción de urnas y actas, la lentitud de los datos (sólo el 20 por ciento en los dos primeros días), hasta la posterior anulación, sumado a la visible presión de EE.UU., dejó en la población el sabor a irregularidad y fraude.

La conclusión es visible, la mayoría no votó a favor de los EE.UU., sino contra su propia situación actual, tal como la apreciaba y la sentía.

Esto demuestra que el nacionalismo divorciado de un planteamiento popular y democrático, aislado de un paquete integral, desligado de avances sociales concretos e históricos que emanen de los sectores populares, y sin proyecto viable y creíble de pistas hacia una nueva sociedad, no funciona.

La crisis panameña contiene elementos subyacentes de debilitamiento de la sociedad civil y de aspiraciones populares contenidas que debieron ser recogidos realmente - no demagógicamente - para avanzar socialmente. Si sumamos a esto la presión norteamericana que contribuyó a deformar el escenario electoral, abrumando a la población con confusión, amenazas y falsas expectativas, advertimos el saldo: el gran perdedor fue el pueblo panameño, que vio truncada lo que creyó era la salida inminente a la crisis que lo agobia; en cambio, vio deslegitimada la vía electoral, pues la anulación de las elecciones expresa que no es posible realizar comicios en condiciones como las actuales.

El gran ganador fue la práctica intervencionista norteamericana, que sale fortalecida en la confirmación de sus acusaciones preelectorales de que iba a ocurrir fraude. Así, los EE.UU. buscan acentuar el aislamiento internacional del gobierno panameño, profundizan la intervención indirecta y buscan legitimar la intervención directa.

La oposición civilista (que cuenta con el aval del ejército más poderoso del mundo) se siente en ventaja, aunque no tenga el poder, y lleva de la mano de los EE.UU. su disputa al campo internacional, buscando condiciones para afirmar el control del Estado. El PDC aparece como el partido hegemónico de oposición, recuperando las bases del arnulfismo y recogiendo el descontento de la población. La golpiza contra los líderes de la oposición «vende imagen» al exterior y despierta simpatías en el interior, por aparecer como víctimas, al mismo tiempo que la imagen hace aparecer a los «Batallones de la Dignidad» como paramilitares represivos. La democracia de la ADOC, ausente de contenidos populares y nacionalistas, parece perfilarse como nueva inquisición, al profundizarse en la coyuntura actual los mensajes anti-comunistas y antipopulares.

El gobierno está en la difícil situación de haber perdido en su discurso la salida democrática que anunciaba a través de las elecciones de mayo. Regresa al punto de partida de junio de 1987 (detonante de la crisis, con las declaraciones de Díaz He-

rrera), pero con el agravante de que le es más difícil convocar el consenso interno. Está más desacreditado y establece como única salida imponer a la sociedad política sobre la sociedad civil. Claro que esto sirve para mantener el poder, pero no para sustentar un proyecto nacional consensual y posible.

### ***En defensa de la nación***

Declaración del Consejo Académico de la Universidad de Panamá

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá expresa su grave preocupación por la crisis política, económica y social que vive el país, la cual está socavando los fundamentos mismos de la República y propiciando la violencia, el desempleo, la pobreza, la inestabilidad y la incertidumbre.

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, reitera su convencimiento de que los principios democráticos de gobierno, la vigencia de los derechos humanos individuales y sociales, el respeto a las instituciones republicanas, la intachable administración de justicia, la primacía de las autoridades civiles debidamente constituidas, el respeto por la soberanía del pueblo expresada a través de elecciones libres, la satisfacción de las necesidades básicas, el fortalecimiento del Estado nacional panameño y la defensa de nuestra soberanía e independencia, constituyen principios fundamentales, que los sectores sociales del país deben discutir, para forjar entre todos la fórmula política autónoma que nos permita salir adelante en estos momentos de aguda incertidumbre.

La Universidad de Panamá ha señalado en múltiples pronunciamientos que la polarización política no debe dividir a la sociedad panameña en bandos irreconciliables y que esta crisis debe y puede ser superada por medio de la negociación y el diálogo respetuoso. En tal perspectiva, planteamos que los sectores políticos, sindicales, profesionales, estudiantiles, religiosos, empresariales, campesinos, militares y cívicos, inicien un diálogo franco y sincero en torno a los problemas del país, con la meta de encontrar para la patria los mejores caminos de redención y progreso social. Estimamos que aún estamos a tiempo para encontrar una alternativa nacional y pacífica a la presente crisis, y se requiere con urgencia una actitud responsable que anteponga los intereses de la patria a los intereses personales, de grupos o partidos.

Advertimos que el acuerdo nacional por el que propugnamos sólo se puede desarrollar en un clima de paz y convivencia social, en donde imperie el libre ejercicio



del derecho de expresión, fundamentado en el respeto a la dignidad y honorabilidad de las personas y a sus derechos individuales y sociales.

La Universidad de Panamá, institución que pertenece a la nación y que históricamente ha estado y está comprometida con el pueblo panameño, considera necesario advertir de los serios peligros que se ciernen sobre la República, como consecuencia del creciente intervencionismo foráneo en nuestros asuntos internos.

En esta ocasión, el bloqueo económico y la amenaza de invasión militar directa por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, deben ser rechazados por todos los panameños, pues estas prácticas son violatorias de las normas jurídicas internacionales consagradas por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. La no intervención en los asuntos internos de otros Estados constituye fundamento indispensable para la paz internacional, y su rigurosa observancia es indispensable para la pacífica convivencia entre los pueblos.

El pueblo panameño está viviendo en esta fase de su historia una compleja y dura crisis política interna y externa. Nos corresponde a los propios panameños, en atención al ordenamiento jurídico y constitucional y el respeto al poder civil, debatir y buscar la fórmula política adecuada para forjar lo que anhela nuestro pueblo: democracia, justicia, libertad, progreso social, soberanía e independencia nacional.

Llamamos a la comunidad universitaria a empeñar nuestros mayores esfuerzos con el objeto de preservar abierta y funcionando esta casa de cultura superior y la integridad física y moral de los universitarios, con el fin de que la Universidad de Panamá continúe sirviendo a los elevados propósitos nacionales y sociales para los que esta institución fue creada. Por ello, exhortamos a la familia universitaria a identificarse plenamente con las medidas que adopte la institución para salvaguardar su integridad y plena economía.

Los universitarios estamos seguros que las grandes mayorías nacionales aspiran a construir con su trabajo diario un país próspero, donde impere la justicia social, la democracia política, la efectiva libertad ciudadana, el respeto a la dignidad humana, y se fortalezca nuestra identidad política y cultural como pueblo soberano e independiente.

Por su parte, los sectores populares organizados se abocan a una recomposición, por el hecho del involucramiento directo en las elecciones (COLINA), por parte de

altos dirigentes obreros, públicos y campesinos, que les hacen perder la capacidad de concertación necesaria en las luchas sociales y gremiales.

El movimiento obrero se encuentra entre el fuego cruzado de los despidos por parte de empresarios «civilistas», y desguarnecido por parte de las autoridades de Trabajo, además de estar presionado para servir de base de apoyo al gobierno.

### **¿Pero, hay salida?**

La crisis es ahora más ingobernable que en sus inicios. Las elecciones agravaron la situación en vez de ayudar a resolverla. La reunión de la OEA sobre Panamá el 17 de mayo parece reforzar el camino de la negociación, que quizás ahora, cuando el laberinto se torna interminable, aparezca como una alternativa. Los otros caminos son tortuosos, giran entre la represión y la intervención. Frente a la negociación cada sector tiene sus intereses.

Los grupos económicos dominantes buscan superar la mediación militar, para ellos ocupar directamente el aparato estatal, y así favorecer una conciliación burguesa, que a través de un sistema de democracia liberal pueda administrar el poder político. Parte de su problema es qué papel darle a los militares en esa transición<sup>5</sup>.

Los militares buscan que su papel en esa transición no vaya en menoscabo del poder adquirido, y que exista un espacio de autonomía para su accionar. Pugnan por controlar el monopolio de la sociedad política, sin compartirlo con otro ejército (EE.UU.), y que ellos sean los protagonistas principales en el proceso de conducir el cumplimiento del aspecto militar (y civil) de la reversión del Canal y las bases a Panamá en el año 2000, y también de cualquier negociación que surja al respecto<sup>6</sup>.

Los EE.UU. buscan asegurar sus intereses fundamentales en Panamá, es decir, la permanencia militar más allá del año 2000, por ser el istmo «garganta estratégica» para su hegemonía mundial, y por la importancia geopolítica del Canal. Además, por los intereses económicos suyos y de sus aliados a través del centro financiero, oleoductos, zonas libres, e inversiones multinacionales, los EE.UU. necesitan un Panamá más alineado y dócil para confiar el traspaso de lo acordado en los Tratados y para negociar su permanencia militar. Para lograrlo están dispuestos a llegar hasta la intervención directa.

---

<sup>5</sup>Milton Martínez: «Crisis política y tutela militar», en Este País, Panamá, enero, 1988.

<sup>6</sup>Nils Castro: Como pez dentro del agua, Panamá, 1989.

Para el pueblo panameño, sus intereses fundamentales están en la satisfacción de las necesidades básicas; el impulso a sus derechos democráticos fundamentales; la necesidad del desarrollo integral, donde el pueblo sea protagonista y no objeto; la afirmación como nación, con derecho a autodeterminarse, y la conquista de la soberanía total. Tiene derecho a conquistar su liberación sin mediatizaciones, a organizarse como pueblo para defender sus intereses<sup>7</sup>.

Para que la negociación camine es necesaria la voluntad política de las partes. También es decisivo que en esta negociación no imperen los intereses creados internos y externos sobre las legítimas aspiraciones populares, nacionales y democráticas de los panameños y, en especial, de la mayoría trabajadora.

### **Referencias**

- \*Anónimo, CARTA ECONOMICA. 24 - Panamá. 1989; Crisis política y tutela militar.
- \*Anónimo, DECRETO N° 58 SOBRE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES, TRIBUNAL ELECTORAL. 58 - 1989; Panamá, ¿ y los sectores populares qué ?
- \*Leis, Raúl, COMANDO SUR: PODER HOSTIL. - CEASPA. 1988; Panamá, el proceso de la crisis.
- \*Loefke, Bernard, MILITARY REVIEW. Agosto - 1988;
- \*Martínez, Milton, ESTE PAIS. Enero - Panamá. 1988;
- \*Castro, Nils, COMO PEZ DENTRO DEL AGUA. - Panamá. 1989;
- \*Leis, Raúl, NUEVA SOCIEDAD. 93. p12-17 - Caracas, Venezuela, Nueva Sociedad. 1988;
- \*CEASPA, NUEVA SOCIEDAD. 83 - Caracas, Venezuela, Nueva Sociedad. 1986

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N° 102 Julio-Agosto de 1989, ISSN: 0251-3552, <[www.nuso.org](http://www.nuso.org)>.

---

<sup>7</sup>Para mayores antecedentes sobre la crisis panameña, consultar: Raúl Leis: «Panamá, ¿y los sectores populares qué?», en Nueva Sociedad N° 93; y CEASPA: «Panamá, el proceso de la crisis», en Nueva Sociedad, N° 83.